



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Superior Tribunal de Justicia
Corrientes



EXP 69453/11

En la ciudad de Corrientes, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente N° EXP 69453/11, caratulado: **"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ COMPAÑIA MINERA S.A. S/ APREMIO"**. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR

EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

I.- A fs. 216/219 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad (Sala IV) desestimó el recurso de apelación deducido por el ejecutante y, en su mérito, confirmó la sentencia del juez de primera instancia que, al

admitir la excepción opuesta por la ejecutada, declaró prescripta la deuda reclamada.

II.- Para así decidir invocó la vigencia del precedente de la Corte Suprema de Justicia que califica a la prescripción liberatoria como una institución jurídica de derecho común cuya regulación compete al Congreso de la Nación, como así también la doctrina del acatamiento condicionado a las decisiones de ese Tribunal en su calidad de máximo intérprete constitucional.

En lo que respecta a la deuda motivo de la ejecución precisó que al referir a *multas fiscales*, su determinación surge luego de un procedimiento administrativo cuya tramitación impide el curso de la prescripción hasta tanto se dicte la resolución respectiva que posibilite la ejecución judicial, lo que conforme el Código Fiscal ocurre al ser rechazado el recurso de reconsideración que puede deducir el contribuyente (arts. 58 y 59).

Señaló que con las constancias obrantes en autos se debía tener por acreditado que el trámite de determinación de infracciones de 2000 y 2001 se inició en 2002, esto es, antes de que opere la prescripción y que finalizó con la resolución dictada el 16/05/2005, la que fue notificada en febrero de 2007. Así concluyó que, computando desde el día siguiente al de la decisión administrativa el lapso de suspensión que prevee por una única vez el Código de fondo, el plazo de prescripción se habría cumplido el 17/05/200, habiendo sido presentada la demanda el 17/10/2011.

III.- Disconforme con la decisión el ejecutante deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que nos ocupa (fs. 225/230), invocando aplicación errónea de la ley en lo que respecta al momento de exigibilidad del tributo, sumado a lo que califica de desacertada interpretación de los precedentes jurispruden-



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-2-

Expte. N° EXP 69453/11

ciales de la Corte (Filcrosa y Hermann) en el marco de la nueva normativa civil y comercial. Remite al antecedente de este Superior Tribunal en el que se invocó la autonomía del derecho tributario para regular las cuestiones atinentes al momento en que resultan exigibles las obligaciones fiscales y el efecto interruptivo del trámite tendiente a su determinación, las que encuentran su regulación en los arts. 90 ss y cc del Código Fiscal Provincial.

IV.- Las sentencias que ponen fin a los procesos ejecutivos en general, y de ejecución fiscal en particular, no constituyen -en principio- sentencias definitivas a los fines de los recursos extraordinarios, dada la posibilidad de un posterior proceso para el resarcimiento de los agravios que puedan derivarse de ellas. Empero, si - como acontece en el caso- la parte recurrente denuncia que la decisión conclusiva del proceso de apremio no constituye derivación razonada del derecho aplicable, corresponde hacer excepción a ese principio en razón del interés institucional que se configura cuando está en juego la recaudación de las rentas fiscales (esta línea de pensamiento es también de la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como puede verse en Juris. Arg., 1994, v.I, p.690; LL, 1975, v.D, p.132; Fallos: 300:88; LL 1993-E, p.399 con nota; ED 157-473 o Juris. Arg., 1994, v.II, p.625, entre muchos otros).

Consecuentemente, deducido el recurso "sub examine" dentro del plazo legal, con satisfacción de las cargas técnicas relativas a su fundamentación y el recurrente se encuentra exento del pago del depósito económico, la vía de gravamen

debe habilitarse. Paso entonces a pronunciarme acerca de su mérito o demérito.

V.- Previo a abocarnos al análisis del planteo que nos convoca estimo prudente recordar que hemos reformulado el criterio de interpretación de las normas tributarias (STJ Ctes., Sent. Civil N°62/2018 en autos "Gobierno de la Provincia de Corrientes c/ Apala SRL y/o Victoria Carboni y/o Colombini Enrique s/ apremio") actualizando una postura ya asumida anteriormente, atendiendo a nuevas circunstancias y fundamentos no evaluados en su momento por la Corte Suprema al revocar la sentencia dictada en el expediente "Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/ Herrmann Alejandro Enrique s/ Apremio" utilizando los argumentos del precedente "Filcrosa" y fallos posteriores.

Desde entonces, mantenemos un enfoque de unidad del derecho y, a la vez, la especificidad del Derecho Tributario a que refirió la Corte Federal en el precedente "Lorenzo Larralde" (Fallos 243-989), reafirmando la necesidad de adoptar un régimen compatible con las características del gravamen, que no es otro que el previsto en la norma tributaria local en la medida que guarde la necesaria razonabilidad, ya que si se aparta extremadamente de los plazos establecidos en la ley de fondo sería inconstitucional, siempre y cuando agravie los derechos de los contribuyentes (GARCIA BELSUNCE, Horacio, "Temas de derecho tributario. La autonomía del derecho tributario frente a la legislación tributaria provincial", ps. 60 y ss), argumento que, en rigor de verdad, es aplicable no sólo a los impuestos locales, sino a todas las contribuciones fiscales e incluso a todos los actos estatales.

VI.- En el marco de la aplicación de la normativa que consideramos adecuada, que no es otra que el *Código Tributario Local*, estamos ante la



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-3-

Expte. N° EXP 69453/11

ejecución de una deuda en concepto de “multas por omisión” que fueron objeto de determinación por Resolución dictada en el expediente administrativo 123-1109-6926-02 en fecha 16/05/2005.

Si bien se trata de infracciones cometidas en el año 2000 su liquidación final fue efectuada luego de un procedimiento que debió llevar a cabo el Fisco y que culminó recién en 2005 con la determinación de una obligación concreta a cargo de la ejecutada. Ello implica que no pudo comenzar a correr el cómputo de la prescripción de la obligación antes de que ella se tornara exigible (así lo ha dicho este Tribunal en caso similar en Sentencia Civil N° 28/2018).

Luego, la intimación por carta documento efectuada en el 2007, conforme lo preceptúa el art. 91 inc. b del Código Fiscal interrumpió el curso del plazo y de esa manera la promoción del juicio -4 años después- se inició antes de que se cumpliera el término de prescripción legalmente previsto en el art. 89 inc. a 4. Ergo la deuda aún no había prescripto.

VII.- En consecuencia, la declaración de prescripción que la Cámara ha efectuado respecto de la deuda motivo de ejecución no resulta ajustada a lo que la normativa tributaria local prescribe y a lo que este Alto Tribunal interpreta que se establece para el caso que nos ocupa, razón por la cual propicio su casación.

VIII.- Respecto de las costas, estimo prudente sean impuestas por su orden en todas las instancias, atendiendo a que la cuestión sometida a revisión ha sido objeto de diversas interpretaciones por los mismos Tribunales intervinientes -lo que

indefectiblemente debió haber influido en la convicción a resistir y a no formular un allanamiento expreso por parte de la ejecutada.

IX.- En vista de lo razonado y concluido precedentemente, si este voto resultase compartido con la mayoría necesaria de mis pares corresponderá hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (fs. 225/230) para, en mérito de ello, casar la sentencia de Cámara y la de primera instancia en lo que exclusivamente ha sido motivo de recurso, con costas en todas las instancias por su orden. En ejercicio de jurisdicción positiva (art. 284 inc. 3 del CPCC) desestimar la excepción de prescripción deducida por la ejecutada y, en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución por la suma total reclamada en la demanda. Sin regulación de honorarios por no corresponder atento al carácter “ad honorem” con que ha sido designado el apoderado del Fisco y no existir imposición de costas a la contraria.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR

PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio ///



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-4-

Expte. N° EXP 69453/11

Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA N° 50

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (fs. 225/230) para, en mérito de ello, casar la sentencia de Cámara y la de primera instancia en lo que exclusivamente ha sido motivo de recurso, con costas en todas las instancias por su orden. 2°) En ejercicio de jurisdicción positiva (art. 284 inc. 3 del CPCC) desestimar la excepción de prescripción deducida por la ejecutada y, en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución por la suma total reclamada en la demanda. 3°) Sin regulación de honorarios por no corresponder atento al carácter “ad honorem” con que ha sido designado el apoderado del Fisco y no existir imposición de costas a la contraria. 4°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ
Presidente
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes